



La economía española atraviesa una situación de extrema gravedad y elevada complejidad, en un entorno de fuerte incertidumbre que afecta considerablemente el día a día de todos los agentes sociales, ciudadanos, consumidores, empresas, funcionarios, al sector público y al privado, a todos los sectores, a la banca, a la bolsa, sin dejar ningún resquicio imperturbable en nuestra sociedad, en una situación sin parangón con respecto a lo vivido en anteriores crisis económicas y sin atisbos fehacientes de que se pueda llegar a percibir el final de un túnel en el que nos encontramos desde hace unos años.

A la caída de la actividad productiva, el continuo aumento del desempleo, el fuerte ajuste de las cuentas públicas y el deterioro de la mayoría de los indicadores económicos, se le agrega el problema de la solvencia del sistema financiero y la afluencia de un mayor déficit público en 2011 por la desviación de algunas CCAA y por la revisión a la baja del PIB, colocándose en un 9 %, lo que complica inevitablemente el objetivo marcado –y que parece a todas luces inalcanzable- de 2012, la reducción del déficit al 6,3 % del PIB.

Si antes del verano la situación no invitaba al optimismo, volvemos en el inicio del otoño a una realidad económica muy difícil, según la reciente evolución de los indicadores económicos. Sigue cayendo la producción industrial, la construcción manifiesta un continuo deterioro, desciende el empleo, aumenta el paro y el turismo también cede, sobre todo por la caída del turismo nacional.

En definitiva, se está empeorando intensamente la situación, sobre todo en lo que se refiere a confianza de consumidores y empresarios, y en todo lo que ello conlleva, consumo privado y e inversión, en un contexto caracterizado por la tensión en los mercados de deuda soberana, las restricciones de acceso al crédito y la elevada incertidumbre. Además, hay que añadir la subida del IVA desde el pasado 1 de septiembre, que sin duda afectará notablemente a la evolución del consumo.

Así las cosas, en las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de julio realizadas para España, se revisa en una décima a la baja la variación del PIB real prevista para 2012 y cuatro décimas al alza la de 2013 respecto a lo estimado en enero, hasta situarse en el -1,8 % y en el 0,1 %, respectivamente.

En 2012 la demanda nacional detraerá 3,7 puntos porcentuales a la variación interanual del producto, mientras que la demanda externa neta aportará 1,9 puntos porcentuales. La contracción de la economía española en 2012 se verá reflejada en el mercado laboral, estimando el FMI una tasa de paro del 24,2 % para este año y del 23,9 % para el siguiente.

Por su parte, la CEOE prevé una caída del PIB del -1,6 % en 2012, si bien, mejora en dos puntos porcentuales la previsión del FMI de crecimiento económico. Esta previsión se basa en las peores expectativas del contexto internacional, lo que afectará a nuestras exportaciones que crecerán menos, aunque seguirán teniendo un peso importante en la recuperación de la actividad. Al tiempo, se producirá un mayor deterioro de la demanda nacional que seguirá frenando a las importaciones.

Este ejercicio 2012 está siendo muy complicado para la economía española, debido a las medidas de ajuste presupuestario tomadas por el Gobierno, subida de impuestos y recorte de gastos, del todo necesario para conseguir alcanzar el objetivo de déficit de este año, pero que está suponiendo un enorme esfuerzo para todo el mundo sin excepción.

Sin embargo, a pesar de este ingente esfuerzo no parece que se vaya a poder cumplir el objetivo del 6,3 %. La menor actividad económica está limitando enormemente los ingresos públicos y al mismo tiempo, el coste de financiación que suponen los elevados intereses, están disparando los gastos financieros, sin olvidar la delicada situación del mercado laboral que están haciendo mella en las cuentas de la Seguridad Social.

A mediados de este ejercicio, las Administraciones Centrales ya habían alcanzado el déficit presupuestado para todo 2012, el -4,5 % del PIB, si bien medidas como la subida del IVA y la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre para los empleados del sector público, permitirán acercarse al objetivo. Las Comunidades Autónomas también tienen que realizar un importante esfuerzo de ajuste que, sin embargo, no va a ser suficiente, ya que se espera una desviación al alza y que sobrepasen su objetivo.

En la reunión del 6 de septiembre del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) se anunció un nuevo programa de compra de deuda pública que supone un apoyo ilimitado pero supeditado a programas de consolidación fiscal y a reformas económicas a través de la petición formal del rescate al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) o al Mecanismo de Estabilidad Europeo (EMS). Esto quiere decir que si un país solicita la ayuda tendrá unos condicionantes macroeconómicos y se le aplicará un estricto seguimiento.

En estos momentos el Gobierno español tiene que estudiar al milímetro las implicaciones y las medidas adicionales que puede suponer solicitar esta ayuda. Por una parte porque pedirán ajustes aún mayores en materia fiscal de los que se han realizado hasta la fecha y empieza a ser limitado el margen de maniobra en algunos temas aunque sí que hay ciertas parcelas del gasto público que deberían revisarse y racionalizarse.

El debate sobre cuáles van a ser las exigencias que Europa nos pediría si nuestro Gobierno solicita la intervención del BCE en los mercados de deuda para bajar la prima de riesgo está abierto, pero no dejan de ser meras especulaciones. Lo que sí es seguro es que serán medidas muy duras (mercado laboral, pensiones, impuestos, sector público...).

Y, al cierre de este boletín, se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2013, en el que se prevé se realicen recortes generalizados y un nuevo esfuerzo de austeridad que afectará a todos los ministerios. Lo importante es que se prioricen los recortes en aquellos gastos no productivos e ineficientes que a la larga no vayan a repercutir en la generación de riqueza. Y sobre todo, es imprescindible que empiecen a tomarse medidas que impulsen el crecimiento, que con el crecimiento sube la actividad económica, el consumo, la inversión, los ingresos públicos, el empleo y, en definitiva, todos aquellos factores que favorecen la riqueza y el bienestar de un país.

***La incertidumbre acecha a la economía española***